



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, primero (1) de agosto de dos mil diecinueve (2019)

Medio de control: Ejecutivo
Demandante: Diana Yaneth Castro y Otros
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 15001-33-33-004-2018-00240-00

Procede el Despacho a proferir auto de seguir adelante con la ejecución, en los términos del inciso 2° del artículo 440 del Código General del Proceso.

ANTECEDENTES:

- Los señores Carlos Javier Castro Piracón, José Joaquín Castro Plazas, Reina María Piracón Puerto, Jinne Ariel Castro Piracón, y Diana Yaneth Castro Piracón, a través de apoderado, promovieron demanda ejecutiva contra la Fiscalía General de la Nación, con base en la conciliación a la que arribaron las partes en la audiencia de que trata el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, celebrada el 3 de septiembre de 2013, donde las partes acordaron el pago del 70% de la condena contenida en la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá el de 25 de julio de 2012, dentro del proceso de reparación directa identificado con el N° 15001233100120060235100; por consiguiente, solicitó librar mandamiento de pago a su favor y en contra de la ejecutada por las sumas equivalente en pesos de :

“A. Perjuicios materiales Lucro Cesante

Para Carlos Javier Castro Piracón, la suma de \$1.639.652, de acuerdo lo consignado en la sentencia

B. perjuicios morales

- 14 SMLMV, para Carlos Javier Castro Piracón
- 10,5 SMLMV, para Para José Joaquín Castro Plazas
- 10,5 SMLMV, para Reina María Piracón Puerto
- 7 SMLMV, para Jinne Ariel Castro Piracón
- 7 SMLMV, para Diana Yaneth Castro Piracón

Según lo establecido en la sentencia por perjuicios morales.

SEGUNDA. Por los intereses moratorios del capital, des de la fecha en que cobró ejecutoria la sentencia y hasta cuando sea totalmente cancelada.

TERCERA. Se condene en costas a la parte demandada.”

- Con auto de 7 de marzo de la presente anualidad, el Despacho libró mandamiento de pago.
- El 13 de junio del año que avanza la entidad ejecutada contestó la demanda, pero no propuso excepciones, pues se limitó a señalar que asignó turno para el pago de la conciliación y el mismo se efectuará, una vez, se cuente con la disponibilidad presupuestal, (fs. 61-100)

I. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

1. Problemas jurídicos:

A fin de determinar si en el *sub examine* es procedente seguir adelante con la ejecución, el Despacho resolverá los siguientes cuestionamientos:

¿Cuáles son los requisitos de fondo y forma que deben reunir la sentencias judiciales cuándo son presentados como base del recaudo ejecutivo?

¿De los documentos aportados se puede establecer la existencia de una obligación clara, expresa y exigible?

2. Título ejecutivo

El Consejo de Estado ha señalado que el artículo 422 del CGP impone ciertas condiciones esenciales al título ejecutivo, unas formales, que se refieren que la obligación debe constar: i) en documentos auténticos que provengan del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él, o ii) en providencias emanadas de autoridades competentes que tengan fuerza ejecutiva, conforme a la ley, y unas condiciones sustanciales, que implican que las obligaciones que se acrediten a favor del ejecutante o de su causante, y a cargo del ejecutado o de su causante sean claras, expresas y exigibles.

Respecto a estas últimas, el Alto Tribunal indicó que es expresa la obligación que aparece manifiesta en la redacción del título, es decir, que debe estar expresamente declarada en el documento que la contiene. La obligación es clara cuando, además, de expresa, aparece determinada en el título, de modo que sea fácilmente inteligible y se entienda en un solo sentido y, finalmente, la obligación es exigible cuando puede demandarse su cumplimiento, por no estar pendiente el agotamiento de un plazo o de condición.¹

En igual sentido, el artículo 297 del CPACA, establece como uno de los documentos, que para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo, “*las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo*

¹ CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA, Bogotá D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017), Radicación número: 68001-23-33-000-2014-00652-01(53819)

Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.”

CASO CONCRETO

Teniendo en cuenta que el ente ejecutado, en el término concedido, no propuso excepciones, se procederá a estudiar si el título ejecutivo reúne las condiciones formales y sustanciales que permitan establecer la legalidad del mismo y, en consecuencia, seguir adelante con la ejecución.

Requisitos de forma

En cuanto a este aspecto, tenemos el Tribunal Administrativo de Boyacá dictó sentencia condenatoria de primera instancia el 25 de julio de 2012, dentro del proceso de Reparación Directa N° 15001 2331 001 2006 02351 00 (fls. 14 a 37), mediante la cual condenó en concreto al pago de perjuicios materiales y morales. En desarrollo de audiencia de conciliación post-fallo que tuvo lugar el 3 de septiembre de 2013, las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio, consistente en el pago del 70% de la condena.

En ella, también se acordó que la demandada daría cumplimiento al fallo en la forma y en los términos previstos por los artículos 176 a 178 del CCA.

En otras palabras, el crédito proviene de una conciliación judicial que se encuentra debidamente ejecutoriada, lo que acaeció el 6 de septiembre de 2013, según constancia secretarial (f. 12) y que contiene una condena en contra de la Fiscalía General de la Nación.

Requisitos de fondo

Los requisitos de fondo se encuentran reunidos, dado que aunque en la conciliación no señaló cual era la suma que debía pagarse a los accionantes, se precisó que equivaldría al 70% de los perjuicios reconocidos en la sentencia de 25 de julio de 2012, e igualmente se señaló que la demandada debería efectuar el pago dentro del término legal y las condiciones contenidas en los arts. 176 y 177 y del CCA, normas en las cuales se dispone el pago de intereses sobre las sumas adeudadas y la indexación de las mismas tomando como base el IPC, es decir la condena impuesta era determinable y clara.

Respecto a la exigibilidad, la obligación contenida en el título ejecutivo se encuentra de plazo vencido toda vez que, como se señaló, el plazo aplicable es el contemplado en el título base de reclamación, hace referencia al artículo 177 del *ibídem*, por tanto, debía ejecutarse superados los 18 meses siguientes a la ejecutoria de la conciliación, los cuales empezaban a partir del 06 de septiembre de 2013, y culminaron el 05 de marzo de 2015, luego, a partir del 06 del mismo mes y año, la sentencia era exigible ejecutivamente; además, la demanda se presentó dentro del término de los 5 años al que alude el artículo 164 del CPACA, toda vez que fue promovida el 27 de noviembre de 2018.

Por lo anterior, no es de recibo el argumento esgrimido por la entidad accionada respecto a que el accionante debía esperar la destinación de recursos, de acuerdo al turno que se le otorgó, pues la citada norma, únicamente, establece que la acción ejecutiva para el cobro de esta clase de obligaciones solo puede ser interpuesta cumplidos 18 meses desde la ejecutoria, pues no puede someterse a los titulares de las mismas a la indeterminación de los derechos reconocidos, máxime, cuando en el presente asunto la conciliación cobró firmeza hace más de cinco años.

Mandamiento de pago

Con auto de 7 de marzo de la presente anualidad, el Despacho libró mandamiento ejecutivo contra la Fiscalía General de la Nación, por las siguientes sumas de dinero:

- “1. Por la suma de \$9.400.756 a favor de Carlos Javier Castro Piracón, más los intereses causados por ese capital entre el 7 de septiembre de 2013 y el 6 de marzo de 2014, y el 11 de noviembre de 2014 y la fecha en que se materialice el pago.*
- 2. Por la suma de \$6.189.750 a favor de José Joaquín Castro Plazas, más los intereses causados por ese capital entre el 7 de septiembre de 2013 y el 6 de marzo de 2014, y el 11 de noviembre de 2014 y la fecha en que se materialice el pago.*
- 3. Por la suma de \$6.189.750 a favor de Reina María Piracón Puerto, más los intereses causados por ese capital entre el 7 de septiembre de 2013 y el 6 de marzo de 2014, y el 11 de noviembre de 2014 y la fecha en que se materialice el pago.*
- 4. Por la suma de \$4.126.500 a favor de Jinne Ariel Castro Piracón, más los intereses causados por ese capital entre el 7 de septiembre de 2013 y el 6 de marzo de 2014, y el 11 de noviembre de 2014 y la fecha en que se materialice el pago.*
- 5. Por la suma de \$4.126.500 a favor de Diana Yaneth Castro Piracón, más los intereses causados por ese capital entre el 7 de septiembre de 2013 y el 6 de marzo de 2014, y el 11 de noviembre de 2014 y la fecha en que se materialice el pago...” (fs. 51-55)*

Dicha providencia se notificó por estado N° 9 del 8 de marzo de 2019, y contra la misma no se presentó recurso alguno, por lo que el día 13 del mismo mes y año cobró firmeza

De conformidad con lo antes expuesto, se mantienen los supuestos fácticos que motivaron el mandamiento de pago y, en consecuencia, se ordenará continuar la ejecución por los conceptos y sumas señalados en el mandamiento de pago, tal como lo indica el numeral 4 del art. 443 del CGP.

Costas.

En cuanto a las costas y agencias en derecho, se atenderá lo dispuesto en el art. 365 C. G del P., numeral 1, según el cual, "*se condenará en costas a la parte vencida en el proceso...*", independientemente de si es el demandante o demandado.

En este caso, como la parte demandada resultó vencida en el proceso, las costas serán a su cargo y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 366 *ibídem*, se tasarán una vez la presente providencia se encuentre en firme.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja Administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERA.- Seguir adelante con la ejecución en contra de la Nación-Rama Judicial en los términos señalados en el mandamiento de pago.

SEGUNDO.- Practíquese la liquidación del crédito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 446 del C. G del P.

TERCERA.- Condenar en costas a Fiscalía General de la Nación. Tásense.

Notifíquese y cúmplase.

Angela María Jojoa Velásquez
ÁNGELA MARIA JOJOA VELÁSQUEZ

Juez

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE
ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA
POR ESTADO ELECTRONICO

N° ³² De Hoy 2 de agosto de 2019
A LAS 8:00 a.m.

Ferny Mauricio Díaz Hernández
FERNY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO

²CZ

² Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 2 de agosto de 2019, en la página web www.ramajudicial.gov.co. Ferny Mauricio Díaz Hernández - Secretario